

Santiago, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós.

Vistos:

En estos autos RIT O-154-2017, RUC 1740072652-3, del Juzgado de Letras del Trabajo de Castro, caratulados “Sindicato de Trabajadores Profesionales de la Educación de la Corporación Municipal de Quellón para la Educación, Salud y Atención al Menor con Corporación Municipal de Quellón para la Educación, Salud y Atención al Menor”, por sentencia de diez de diciembre de dos mil diecinueve, se acogió la excepción de prescripción opuesta respecto de los derechos y acciones originadas en prestaciones correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014, y se hizo lugar a la demanda de cobro de aumento de la bonificación proporcional establecido en la Ley N° 19.933, en cuanto se declaró que los docentes que se indica tienen derecho al pago de tal concepto devengado durante los años 2015 y 2016.

Ambas partes dedujeron recursos de nulidad, y una sala de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, por resolución de fecha catorce de octubre de dos mil veinte, los rechazó.

Respecto de dicha decisión tanto los demandantes como la demandada interpusieron recursos de unificación de jurisprudencia para que esta Corte los acoja y dicte las sentencias de reemplazo que describen.

El arbitrio planteado por la demandada fue declarado inadmisibile, y se ordenó traer estos autos en relación para conocer del sostenido por los demandantes.

Considerando:

Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483 A del Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de tribunales superiores de justicia. La presentación respectiva debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto del asunto de que se trate, sostenidas en las mencionadas resoluciones y que hayan sido objeto de la sentencia contra la que se recurre y, por último, se debe acompañar copia autorizada de la o de las que se invocan como fundamento.

Segundo: Que la materia de derecho respecto de la cual se solicita unificar la jurisprudencia, consiste en determinar si las acciones que derivan de derechos contemplados en leyes especiales prescriben conforme lo dispuesto en el artículo



510 del Código del Trabajo, o sí, por el contrario, se rigen por las normas del derecho común, esto es, por los artículos 2514 y 2515 del Código Civil.

Reprocha que la decisión se apartara de la doctrina sostenida en las decisiones que apareja para efectos de su cotejo, dictadas por las Cortes de Apelaciones de Antofagasta en la causa rol N° 203-2017, y por esta Corte en los ingresos rol N° 27.621-2016 y 2.829-2014.

En las dos primeras se sostuvo que en la medida que la Ley N° 19.933 no alude en forma expresa a términos de prescripción para el ejercicio de las acciones tendientes a obtener esa bonificación especial, cobra vigencia el principio protector que emana de los artículos 1° y 5° del Código del Trabajo, en orden a que en toda decisión adoptada en el ámbito de las relaciones laborales, para establecer o determinar un determinado derecho del trabajador debe acudirse al principio *in dubio pro operario*, ejercicio que, en el caso, debió conducir a aplicar las normas del derecho común, esto es, el artículo 2515 del Código Civil, vinculado con su artículo 2514, que fija en cinco años el plazo de prescripción para las acciones ordinarias, contado desde que la obligación se hubiere hecho exigible.

Y en la tercera se declaró que los beneficios consagrados en el artículo 80 de la Ley N° 15.840, en particular, la indemnización por años de servicio que establece, tienen su origen en dicha ley especial y no en las normas del Código del Trabajo, de suerte que no resulta aplicable lo dispuesto en su artículo 510, desde que dicho precepto alcanza o regula, únicamente, “los derechos regidos por este Código”, por lo que al no existir en la citada ley un plazo de prescripción especial para el beneficio laboral en cuestión, deben aplicarse las reglas del derecho común.

Tercero: Que la sentencia impugnada, en lo que interesa, rechazó el recurso de nulidad que los demandantes dedujeron, sobre la base del motivo previsto en el artículo 477 del Código del Trabajo, por infracción de su artículo 510, inciso primero, y de los artículos 2515 y 2514 del Código Civil.

Como fundamento de la decisión, se consideró que el artículo 71 del Estatuto Docente señala “*Los profesionales de la educación que se desempeñan en el sector municipal se regirán por las normas de este Estatuto de la profesión docente, y supletoriamente por las del Código del Trabajo y sus leyes complementarias*”; de manera que al no existir una norma específica sobre prescripción, el plazo respectivo es el contemplado en el inciso primero del artículo



510 del Código del Trabajo, dado que se trata de una contraprestación en dinero de la que son acreedores los demandantes por causa del vínculo laboral que los ligaba con la corporación municipal, de manera que la sentencia del grado estimó correctamente que en el caso se aplica el plazo de prescripción de dos años, de acuerdo a la regla contenida en la citada norma, y no el previsto en los artículos 2515 y 2514 del Código Civil.

Cuarto: Que, en consecuencia, al cotejar lo fallado en las sentencias invocadas por los recurrentes, con lo decidido en la que se impugna, es posible concluir que concurre el presupuesto establecido en el artículo 483 del Código del Trabajo para unificar la jurisprudencia sobre la materia de derecho propuesta, esto es, la existencia de interpretaciones diversas en relación a una cuestión jurídica proveniente de tribunales superiores de justicia, razón por la que corresponde determinar cuál postura debe prevalecer y ser considerada correcta.

Quinto: Que, para dilucidar lo anterior, se debe tener presente el criterio expuesto por esta Corte a partir de las sentencias dictadas en la causa rol N° 19.100-2017, como en la correspondiente al ingreso 37.778-2017, entre otras, en las que se concluyó que las acciones que derivan de los derechos contemplados en la Ley N° 19.933, como el aumento de la bonificación proporcional mensual, prescriben conforme lo dispuesto en las normas del Código del Trabajo.

Para ello se tuvo presente que la prestación perseguida es el aumento del bono proporcional previsto por la Ley N° 19.933, bonificación que se estableció por el artículo 8 de la Ley N° 19.410. Sin embargo, ninguno de dichos cuerpos legales, tampoco el Estatuto Docente, se pronuncia acerca del plazo en que prescribe la acción para obtener el reconocimiento de tal derecho, en tanto que el artículo 71 de la Ley N° 19.070 señala que los docentes del sector municipal se rigen por las normas de dicho estatuto, y supletoriamente, por el Código del Trabajo y sus leyes complementarias.

Y, a continuación, se analizó la calidad jurídica que reviste el emolumento demandado, considerando que, si bien en cuanto a su base de cálculo se sustenta en las disposiciones de una ley especial -N° 19.933-, constituye un estipendio contemplado en el Estatuto Docente, a saber, en su artículo 63, introducido por la Ley N° 19.410, que únicamente fue incrementado por la Ley N° 19.933, lo que desde ya orienta la decisión hacia la norma de reenvío transcrita en el motivo precedente. Además, el artículo 10 de la Ley N° 19.410, al establecer la forma de calcular la bonificación proporcional mensual, le da el tratamiento de



remuneración, y su artículo 13 se refiere a ésta como un “beneficio remuneratorio”. Idéntica calidad se le otorga en la Ley N° 19.933, que en su artículo 9° estipula que *“los recursos que obtengan los sostenedores de los establecimientos educacionales del sector municipal, del sector particular subvencionado y del regido por el Decreto Ley N° 3.166, de 1980, en razón de esta ley, por concepto de aumento de subvención, serán destinados exclusivamente al pago de remuneraciones docentes”*.

De tal forma, no cabe duda que constituye una herramienta de mejora salarial que, en la actualidad, forma parte de la remuneración mensual y que la bonificación proporcional mensual -y su incremento, en aquellos casos que resulta procedente- constituye un rubro fijo en las remuneraciones de los docentes, de lo que se sigue que dichos estipendios, al tener un carácter netamente remuneracional, y periódico, constituyen una prestación de orden laboral irrenunciable, consagrada y protegida por el Código del Trabajo, plenamente subsumible en el concepto dado en el inciso primero del artículo 41 de dicho cuerpo legal.

A lo que se debe agregar que la enumeración que realiza el artículo 42 del Código del Trabajo no es de carácter taxativo, sino que corresponde sólo a algunas de las formas de remuneración establecidas por el legislador; por lo que también la constituyen aquellos incentivos o asignaciones que, como la bonificación en estudio, tienen como origen la prestación de servicios y además han adquirido fijeza, se devengan en forma mensual, y se pagan permanentemente.

Sexto: Que, entonces, el plazo de prescripción extintiva de la acción para obtener el pago del incremento del bono proporcional mensual es aquel contemplado en el inciso primero del artículo 510 del compendio normativo laboral, por una doble razón; en primer lugar, por cuanto le es aplicable supletoriamente de acuerdo al artículo 71 del Estatuto Docente y, luego, por cuanto se trata de una contraprestación en dinero que perciben los demandantes por causa del vínculo laboral que los liga con la Corporación Municipal de Quellón, esto es, una remuneración, derecho irrenunciable consagrado en el estatuto laboral.

Séptimo: Que, en consecuencia, habiéndose determinado la interpretación acertada respecto de la materia de derecho objeto del juicio, que coincide con lo resuelto en la sentencia impugnada, el presente recurso de unificación de jurisprudencia deberá ser rechazado.



Por estas consideraciones y en conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 483 y siguientes del Código del ramo, **se rechaza** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de catorce de octubre de dos mil veinte, dictada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y devuélvase.

Rol N° 134.192-20.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señoras Gloria Ana Chevesich R., Andrea Muñoz S., María Cristina Gajardo H., y el abogado integrante señor Gonzalo Ruz L. No firma la Ministra señora Gajardo, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar en comisión de servicios. Santiago, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós.



En Santiago, a treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

